Migración y Desarrollo

Colección 7

Deportaciones, Inseguridad y la migración circular en Honduras

Amelia Frank-Vitale
Sandra Ivett Amador Mazariegos



OMIH
OBSERVATORIO DE MIGRACIONES INTERNACIONALES EN HONDURAS
FLACSO HONDURAS
UNAH

Deportaciones, Inseguridad y la migración circular en Honduras

Amelia Frank-Vitale
Sandra Ivett Amador Mazariegos





301
JHMC

Frank-Vital, Amelia y Amador Mazariegos, Sandra Ivett. Deportaciones, Inseguridad y la migración circular en Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 1ed. pp.14; 2020.

ISBN 978-99979-857-5-0

1. MIGRACIÓN 2. SOCIOLOGÍA 3. ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL, ETNOGRAFÍA

Director de FLACSO Honduras: Rolando Sierra: rolando.sierra@unah.edu.hn
Coordinador de investigación: César Castillo: cesar.castillo@unah.edu.hn
Coordinadora del OMIH: Jacqueline Cruz: jacqueline.cruz@unah.edu.hn
Asistente de investigación del OMIH: Rosa Funes: rosa.funes@unah.edu.hn
Asistente de monitoreo del OMIH: Eduard Ortíz: eduard.ortiz@unah.edu.hn

Fotografía:
Whitney Godoy

Diseño y producción:
Publigráficas, S. de R. L.

Este proyecto es financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El Proyecto "Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración" del programa Euro + Labor plasma el compromiso de la Unión Europea y de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos como valores fundamentales y objetivos que deben promoverse mediante las relaciones con el resto del mundo. Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la opinión de la Unión Europea ni de la AECID.

Presentación

Uno de los ejes de trabajo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Honduras está relacionado con las migraciones internacionales, en ese sentido se creó el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), cuyo objetivo es analizar las magnitudes, tendencias y características de la migración, así como la política pública relativa a la migración internacional.

En su conjunto, el OMIH pretende a través del monitoreo y las investigaciones, aportar información relevante y actualizada acerca de los factores que contribuyen a la migración internacional, la cual puede ser de utilidad para la toma de decisiones sobre políticas públicas de migración en Honduras.

De esta manera, por medio del proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y con financiamiento de la Unión Europea, se ha logrado impulsar y apoyar una agenda de investigación en migraciones en Honduras por medio de estudios realizados en forma conjunta con los centros regionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Asimismo, a través del Fondo de Investigaciones del OMIH (FIOMIH) se ha colaborado con los centros de investigación de universidades públicas y privadas, docentes investigadores, estudiantes de posgrados y ONG nacionales, así como con las investigaciones elaboradas por el propio FLACSO-OMIH desde el 2016 hasta la fecha.

En el marco de todo este trabajo de investigación se lanza la presente colección de publicaciones sobre Migración y Desarrollo para difundir el conocimiento e información sobre las migraciones internacionales y de esta manera, apoyar a los tomadores de decisiones, estudiosos de la academia y de la ciudadanía en general, en la construcción de las políticas públicas requeridas para un adecuado tratamiento de esta materia.

Rolando Sierra Fonseca
Director FLACSO Honduras
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales


DOMICILIO
2280-8800
9903-3683
Ficohsa
Selman 5

Cuando la migra detuvo a Ricardo en los Estados Unidos, él aseguró a sus amigos que pronto iba a volver. «Solo voy a saludar a mi familia», dijo. Hacía cuatro años desde que los vio la última vez que fue deportado y ya extrañaba a su mamá. Ricardo llegó a Honduras en un vuelo con más de 100 de sus compatriotas el 23 de septiembre del año pasado. Fue el primer vuelo de deportados del día. Iba a llegar otro en la tarde. Un día normal en el aeropuerto de San Pedro Sula.

Al salir del aeropuerto, Ricardo va directo a la casa de su tía. No avisa a nadie que va a llegar; quería aparecer de sorpresa. Toma un taxi a la residencial donde ella vive, pero antes de poder tocar la puerta, unos muchachos se le acercan, lo montan en una mototaxi y lo llevan a una zona remota. Lo desnudan y miran sus tatuajes, le preguntan: «¿Por qué venís acá?». Ricardo intenta explicar las razones por las cuales llegó a la colonia sin notificar y lo que significan de sus tatuajes: uno de ellos es el nombre de su madre. Tiene suerte. La referencia de su tía funciona. Eventualmente, lo regresan a la casa de ella, pero antes de soltarlo le advierten: «Cuidadito».

Cuatro días después, Ricardo se va de Honduras rumbo a Estados Unidos otra vez. Su tía me dice: «Me duele, pero él no puede quedarse acá; estar acá es como estar encarcelado. No se puede salir de la casa, no puede trabajar. Acá no se puede quedar». Poco después de entrar en México, lo balean unos delincuentes que controlan un tramo de la ruta del tren de carga que utilizan muchos migrantes centroamericanos. Está hospitalizado en Tenosique, Tabasco, por corto tiempo. Los doctores deciden no quitar la bala que quedó en su pierna. Cuando le dan de alta, él se dirige hacia el norte. El 23 de noviembre —tan solo dos meses después de haber llegado al aeropuerto de San Pedro Sula— me informa que está de regreso en los Estados Unidos.

En este texto ofrecemos algunas de nuestras reflexiones preliminares de un estudio enfocado en la experiencia de la gente deportada —ya sea de México o de los Estados Unidos— a zonas que se consideran peligrosas en el Valle de Sula, Honduras. En los últimos cinco años, Honduras ha visto deportaciones masivas. Desde 2015 hasta la fecha, más de 300 000 hondureños han llegado deportados a su país de origen. A la vez, ciertas zonas —incluyendo el Valle de Sula— han pasado a convertirse en lugares que se consideran entre los más violentos del mundo.

Esta situación crea una dificultad existencial para mucha gente como Ricardo: no pueden quedarse en sus casas sin arriesgar la vida, situación que motiva a repetir la experiencia de migrar pese a que tampoco son bienvenidos en los países más al norte. Utilizando su historia como una situación emblemática del problema, buscamos hacer dos cosas: primero, argumentamos que distinguir entre personas que emigran por razones económicas y las que emigran en busca de protección no tiene sentido en el caso de Honduras y

buscar hacerlo contribuye a una situación de deportación peligrosa y poco efectiva en detener la migración irregular. De ahí, ofrecemos unas reflexiones sobre retos metodológicos y cómo estas dificultades también están vinculadas con cuestiones estructurales de la política migratoria de la región.

Una de las preguntas que guiaba la investigación se refleja en la historia de Ricardo: ¿dónde hay espacio en el mundo para alguien como él? No se puede quedar en su país, no puede vivir tranquilo en México tampoco. En los Estados Unidos, Ricardo sabe que, tarde o temprano, los agentes de migración vendrán por él de nuevo y es probable que, cuando pase, estará encarcelado por meses o hasta años por haber entrado de nuevo en el país sin papeles —el crimen: *felony re-entry*—. Después, será deportado nuevamente a una colonia donde tendría que vivir también como si fuera un reo, esto si es que sobrevive la llegada.

Ricardo se va porque su vida se ve amenazada directamente. Su tía, su madre y su familia reconocen que ahí no se puede vivir, pero también relacionan el riesgo que él corre con la historia de pobreza que tiene la familia. Su mamá me dice: «Acá él no puede trabajar». Los mismos tatuajes le prohíben entrar en la maquila o cualquier otro trabajo disponible para alguien de su edad, con su experiencia, con su nivel de estudios. Su mamá menciona, enseguida: «Él no tiene estudios; no hay trabajo para él. Infortunadamente no tenía yo para poder mandarle a estudiar». Ella piensa que, si ella hubiera tenido la capacidad de darle más económicamente a su hijo, no estaría en esta situación en la que está.

Para muchos como Ricardo, la violencia es la causa directa de su salida del país; sin embargo, la violencia es también un efecto de la desigualdad social en el país más desigual de América Latina. Honduras y la América Central han sido históricamente catalogadas como regiones muy pobres con indicadores de desarrollo humano muy bajos. Honduras ha experimentado dramáticamente cambios no muy esperanzadores en la última década. Durante estos 10 años, los indicadores de violencia tuvieron los números más altos de la región y del mundo: casi el 70 % de la población vive en pobreza, la tasa de paro actual es la más alta de la década y 5 de cada 10 hondureños que trabajan están subempleados, o sea, ganan menos del salario mínimo establecido o trabajan menos horas del horario normal (Banco Mundial, 2017).

La violencia pandilleril es solo uno de los resultados de un complejo sistema que expulsa a las personas de su lugares de origen. Ricardo y quienes lo secuestraron a su regreso a Honduras tienen el mismo origen y crecieron con las mismas condiciones sociales. Analógicamente, se puede decir que la migración y la violencia pandilleril son hijas de la misma madre. Las políticas económicas de desarrollo implementadas en Honduras históricamente, en su versión neoliberal, han despojado a la mayoría de la población del bienestar social y económico en las últimas décadas. Cuando las ONG o programas gubernamentales impulsados por Estados Unidos se enfocan en la «reinserción» de las personas deportadas, están perdidos. Para gente como Ricardo y los muchachos quienes lo secuestraron nunca hubo

una primera inserción. Buscar hacerlo a su regreso, sin que los factores estructurales hayan cambiado, es demasiado tarde.

Como si esto no fuera suficiente, fenómenos demográficos vuelven más compleja la situación: Honduras tiene un bono demográfico, lo que quiere decir que la mayoría de su población está en edad de trabajar. Se proyecta que hasta el 2040 esto se mantendrá así (CEPAL, 2012). Ricardo también pertenece a este grupo etario en un país en donde no hay empleo. La maquila, que es el sector industrial que mayor empleo genera, proyectó 151 000 puestos de trabajo para el 2018, lo que representa un ingreso anual aproximado de 500 millones de dólares (La Prensa, 2018). El ingreso por remesas, por su parte, asciende a 4000 millones de dólares al año, la mayoría de estas enviadas por personas que entraron de forma irregular a EE. UU., quienes también, al igual que Ricardo, fueron expulsadas ya sea por la pobreza o la violencia, dos caras de una misma moneda.

Entonces, ¿por qué emigran él y sus compatriotas?, ¿son migrantes económicos o son refugiados que deben de poder gozar de todas las protecciones internacionales que trae este término?

Para fines de este artículo, dimensionar las implicaciones económicas y sociales del retorno obligado a Honduras nos ayudará a entender por qué la migración es un fenómeno repetitivo con altos índices de reincidencia. Cuando hablamos de violencia e inseguridad, un acercamiento a los tratamientos mediáticos, político-institucionales y de las ONG (en su mayoría) puede ayudarnos a identificar fácilmente a quiénes ellos asumen «culpables»: las maras y pandillas. Por otro lado, a diferencia de nuestro vecino país El Salvador, nosotras vemos que la violencia en Honduras es multicausal y cuenta con una diversidad de actores y agentes persecutores —entre ellos las maras y pandillas, claro, pero también grupos de sicarios, cárteles de droga, grupos paramilitares o de vigilantes dedicados a la «limpieza», y las mismas fuerzas policiacas, militares, y estatales—. Un dato relevante indica que el departamento con los índices de homicidio más altos del país no es Cortés (donde están ubicadas San Pedro Sula y Choloma) ni tampoco Francisco Morazán (donde quedan Tegucigalpa y Comayagüela), ambos lugares con zonas urbanas, sobrepobladas, y precarias donde sí predominan las maras. El departamento con índices de homicidio más altos actualmente es Atlántida, un departamento en su mayoría rural que se ubica por la costa norte caribeña. Eso nos indica que culpar a las maras como la fuente absoluta de la inseguridad en Honduras es erróneo.

En la López Arellano, el sector más poblado de Choloma, Cortés, la gente cuenta que por varios años no había maras en la colonia central, aunque previamente era una zona famosa en la región por violencia de pandillas. ¿A qué se debe, entonces, este cambio? Cuentan que es porque en la zona se estableció un cartel conocido como Los de la Rumba, que, desde que llegó a la zona, se encargó de poner «orden». (*Orden* quiere decir que mataron a muchos de los mareros y que a los pocos que sobrevivieron los obligaron a someterse a su nuevo mando). Los del cartel querían «orden» porque su fuente principal de ingresos fue el narcomenudeo y el

tráfico de drogas hacia México y los Estados Unidos. Los de la López dicen que la época en la estaban ellos era una de tranquilidad: los negocios volvieron a abrir, uno podía estar en la calle de noche sin miedo…, pero, hace unos dos años, Los de la Rumba fueron en su mayoría desarticulados y surgió un vacío de poder en el sector. Actualmente, vemos un incremento en homicidios y otros hechos violentos en toda Choloma, pero que se concentran en el sector de la López, dónde nuevos grupos —algunos de ellos maras y otros que quedaron de Los de la Rumba— buscan tomar control del territorio. El ejemplo de Los de la Rumba, sin embargo, nos muestra que son actores no-estatales los que forman la ley en ciertas zonas.

Para Mariela, una joven de la López, es difícil contestar a quiénes les tiene más miedo: a los delincuentes o a los policías. Cuando le hago la pregunta, pausa. Se ríe. Pausa. Solo después dice: «Buena pregunta. Creo que a los policías. Con los delincuentes, uno se sabe qué es y cómo son, y de hecho conozco una amiga que fue novia de uno de Los de la Rumba y a ella le trató justo; con los militares, nada que ver». Mariela está convencida de que muchas de las mujeres que aparecen muertas en la López son víctimas de la policía militar —la misma a la cual el presidente de Honduras cataloga de responsable por la nueva ola de seguridad en el país—. Mariela dice que ellos son quienes más miedo dan: hacen lo que quieren y echan la culpa a quienes quieren.

En el otro lado del Valle de Sula, en una colonia del sector Rivera Hernández, un joven de 19 años me comenta que donde él vive —un sector dominado por la mara Barrio 18— él puede caminar tranquilo a medianoche. Él creció ahí; lo conocen, dice. Se acuerda cuando era un lugar donde asaltaban todo el tiempo, pero formaron la mara y ahora, si alguien roba, los integrantes de ella lo exilian o lo matan. No hay robos. «Yo puedo caminar de noche —continúa—, pero si llega una patrulla, ahí si es cuando me largo, corro, busco esconderme. Se que, si ellos me levantan, es posible que no vuelva a aparecer». Mientras escribíamos este texto en finales de 2018, dos agentes de la ATIC (la Agencia Técnica de la Investigación Criminal) levantaron a dos jóvenes. Sus cuerpos aparecieron poco después con indicaciones de tortura. El debate en Honduras después fue si eran o no agentes de la ATIC; como sea, para la población en general, ambas posibilidades son igual de creíbles.

La misma policía recomienda a las víctimas que solo pongan una denuncia oficial justo cuando estén listos para irse del país. Ellos saben que dentro de sus fuerzas hay elementos que colaboran con toda la variedad delincuencial del país. Aun cuando fueran confiables, las cifras muestran que tan solo el 1 % de los homicidios en las ciudades más grandes terminan en condena, así que existe muy poco incentivo para que las víctimas de amenazas y los testigos de actos violentos acudan a la policía; hay, sin embargo, amplias razones para desconfiar de ellos.

Dado a esta extensa geografía de inseguridad, muchos jóvenes llegan a México o a los Estados Unidos huyendo de la violencia en sus comunidades. Allí un gran número de ellos son capturados y luego

deportados. En los peores casos, posteriormente son asesinados a su regreso; muchos no corren con la «suerte» que tuvo Ricardo al llegar. La investigadora Elizabeth Kennedy realizó una compilación de casos en el 2015 basada en reportes de la prensa local y encontró que 35 personas deportadas fueron asesinadas en Honduras días después de su deportación (Agencia Reforma, Mexico, 2015). Y estos solo son los casos reportados y documentados. Es importante mencionar que no existen datos oficiales con respecto a personas deportadas que hayan muerto de manera violenta a su llegada al país. Por notas de la prensa local es como en algunas ocasiones se puede identificar a la víctima como «deportado(a)», ya que generalmente es mencionado por algún familiar o conocido. El Observatorio de la Violencia en Honduras, que en los últimos años se ha convertido en el referente estadístico para estos temas, no tiene una clasificación específica para agrupar asesinatos de personas deportadas. Además, en Honduras, hay que tomar en cuenta que muchos asesinatos —de deportados o no— nunca llegan a ser contados ni en cifras oficiales ni en reportajes de la prensa; así que podemos decir que lo que ha documentado Kennedy es un número mínimo de personas deportadas dañadas a su regreso.

También para el 2015, Geraldina Garay, del Centro de Atención Migrante Retornado-Lima (CAMR), mencionaba:

> A uno le da mucho sentimiento, porque nos dicen que no pueden llegar a su lugar de origen. […] Si llegan, a la media hora ya van a estar muertos. A veces los tratamos de apoyar para que puedan salvar su vida. […] Lamentablemente, por parte del gobierno no hay lugares de albergue o instituciones que puedan apoyarles a ellos. Hay otros que escuchamos en las noticias que lamentablemente fue asesinado y que apenas tenía dos o tres días de haber llegado de Estados Unidos.

Garay no es investigadora: está afiliada con la Pastoral de la Movilidad Humana de la Iglesia católica en Honduras, que ha estado en CAMR por años, incluso antes de la crisis de 2014, cuando el gobierno de Honduras toma más interés en el tema y control sobre el proceso. La observación de Garay está basada en sus conversaciones con miles de personas que pasan por las puertas de este centro. Lamentablemente, el gobierno de Honduras no permite a ninguna investigadora —ni Kennedy, ni nosotras presentes, ni nadie— realizar investigación de cualquier tipo dentro de los centros de recibimiento de los deportados; así que los datos son parciales y anecdóticos, pero insistimos que representan una base de la situación, la cual es más grave de lo que se puede documentar mediante cifras.

Mientras basamos nuestra investigación en la experiencia de gente recién deportada, aquí también queremos abordar los retos metodológicos de hacer un estudio de deportados que no pueden quedarse en su país. Preguntamos ——y para esto no tenemos respuesta definitiva aún—: ¿cuáles son los métodos más eficaces para llegar a una población en movimiento, en riesgo, e intencionalmente escondida por las instituciones a las cuáles les corresponde garantizar su bienestar?

Yo había conocido a Ricardo un día en el que sí pude estar en el centro donde se reciben a todos los deportados adultos que manda los Estados Unidos a Honduras. El encuentro con Ricardo fue pura casualidad: repartí mi tarjeta a varias de las personas mientras hacían fila para ser procesados y él me contactó después. Fui entonces a verlo a él, a sus tías y a su mamá en la residencial. Solo así tuve la oportunidad de conocerlo en los pocos días que él estuvo en su país de origen. No obstante, por el posicionamiento del gobierno de Honduras, no he podido replicar esta metodología con las muchas otras personas que llegan a Honduras, pasan unos cuantos días acá y rápido vuelven a tomar la ruta migratoria.

Creemos que el tema del acceso es más que solo un asunto metodológico: es un tema que embarca la problemática de migración, seguridad y políticas regionales en una manera más general. El gobierno de Honduras empieza a restringir el acceso a agentes no-gubernamentales en junio de 2017, poco después de que una ONG que había estado presente en Belén —el lugar en donde se reciben a los menores de edad deportados— da a conocer un informe que indica las razones principales por las cuales se van los jóvenes del país. Ellos afirman que los jóvenes se van principalmente por cuestiones de inseguridad; sin embargo, el gobierno de Honduras ha estado celebrando una reducción drástica en las cifras de homicidios en el país y el presidente Juan Orlando Hernández ha basado su fama en su habilidad de reducir la violencia. El informe de esta ONG contradice claramente el discurso estatal. Poco tiempo después de la publicación del informe, se prohíbe a toda persona ajena al gobierno estar presente en los centros cuando están ahí los recién deportados.

Tal vez casualmente, en este mismo tiempo, el gobierno de Honduras empieza a recibir directamente los fondos de la Alianza para la Prosperidad. Son 800 millones de dólares anuales que recibe el gobierno por el tema de «prevención de la migración», lo cual es un eje principal de la Alianza y un tema estratégico para Estados Unidos. Hay muy poca información pública que nos indica en qué se ha invertido esta cantidad de dinero, pero podemos ver que una parte es para publicidad en campañas para convencer a la población de no migrar (las cuales son totalmente inútiles) y reforzar fuerzas policiaco-militares siguiendo la línea de los Estados Unidos, que ve a la migración como un tema de seguridad.

Este posicionamiento del gobierno con respecto a la investigación y el control de información no se ve solo en el tema migratorio, aunque es el tema que nos ocupa aquí hoy. El gobierno quiere asegurar ser la única fuente de información y poder decidir quiénes, cómo y cuándo tendrán acceso.

Este control, entre otras cosas, permite reafirmar un cambio drástico en la situación de inseguridad en el país, lo cual complica bastante la posibilidad para los jóvenes hondureños de acceder al sistema internacional de protección fuera de su país. Dos personas recién deportadas que han pedido asilo en los Estados Unidos me dijeron la misma historia: en cada caso, el juez había dicho que creía que la

persona tenía miedo de regresar a su país, pero como el gobierno hondureño está asegurando que el país está mucho mejor, no encontraba la manera de aprobar su petición de asilo. Los dos fueron deportados.

Así que volvemos a la pregunta inicial: ¿dónde hay lugar en el mundo para un joven pobre, amenazado, que no encuentra como quedarse en su país y tampoco encuentra protección afuera? Con eso cerramos: una posible respuesta es lo más escalofriante. Los únicos que reciben a tal joven con los brazos abiertos son las mismas maras, pandillas y los cárteles de droga tanto en Honduras como en México, ahí sí es bienvenido. Con rechazo por otros sectores, ¿qué podemos esperar de él más que se involucre con las mismas personas que tuvieron que ver con su decisión de abandonar su país en primer lugar?

Bibliografía

Agencia Reforma, Mexico. (15 de Octubre de 2015). «Hallan 83 muertos a consecuencia de las deportaciones de EE. UU. a Centroamérica». Hoy Los Ángeles.

Banco Mundial. (2017). www.bancomundial.org. Recuperado el 12 de Junio de 2018, de https://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview#1

CEPAL. (2012). Juventud y bono demografico en Iberoamerica. Madrid: CEPAL.

La Prensa. (26 de Junio de 2018). «La maquila ha generado 6,072 empleos este año». La Prensa.

DEPORTACIONES, INSEGURIDAD Y LA MIGRACIÓN CIRCULAR EN HONDURAS

Amelia Frank-Vitale

Antropóloga cultural enfocada en la migración centroamericana y la violencia. Después de años en México estudiando la migración de tránsito, actualmente está realizando trabajo de campo en San Pedro Sula, Honduras. Utilizando la etnografía y la fotografía participativa, documento como la gente deportada reconfiguran sus vidas y reimaginan sus futuros después de haber sido mandada de vuelta a algunos de los barrios más peligrosos en el mundo.

Este proyecto seta apoyado por The Social Science Research Council, The Wenner-Gren Foundation, The Inter-American Foundation, The Fulbright, y el Rackham International Research Award de la University of Michigan.

Actualmente soy candidata al doctorado en Antropología en la Universidad de Michigan. Tengo un BA en Antropología de Yale University, un MA en Ethics, Peace, y Global Affairs de American University, y un MA en Antropología de la Universidad de Michigan. También colaboro con el Undocumented Migration Project, de Dr. Jason De León, actualmente afiliado con UCLA.

Sandra Ivett Amador Mazariegos

Licenciada en Sociología egresada de la UNAH-VS, actualmente pasante de la Maestría en Ciencias Sociales, Estudios Urbanos y Migraciones Internacionales de FLACSO Honduras, con diplomado de Ciencia Política de FLACSO / UNAH-VS 2018

Seis años de experiencia docente del Departamento de Humanidades, CEUTEC SAP - 2012-2019, así como docente del Departamento de Ciencias Sociales CURLA-UNAH- 2017

- Experiencia de trabajo en el ámbito de investigación, en materia de experiencia del retorno al lugar de origen, mujeres migrantes retornadas en Choloma Cortes (FLACSO Honduras) (Proceso de revisión para publicación) - 2018-2019
- Investigadora sobre La Cultura política de los estudiantes universitarios en Honduras (Artículo para revista INNOVARE UNITEC, PUBLICADO – 2018
- Consultora para Mapeo de instituciones de atención a la niñez en el Valle de Sula (CASM) -2017
- Elaboración de Boletines sobre vigilancia y auditoría fiscal del municipio de San Pedro Sula (FOSDEH/ Foro Social Valle de Sula) - 2017
- Elaboración Boletines sobre violencia de Género (MOMUCLAA)- 2017
- Consultora para Línea Base y Línea Final Proyecto Chicas en Conexión, PASMO Honduras- 2016
- Asesora metodológica a proyectos de tesis pre-grado. (CEUTEC SAP) - 2016
- Consultora para Linea base de Proyecto con Mujeres Trabajadoras Sexuales, Asociación Hondureña Mujer y Familia-2016
- Investigadora en estudio sobre La Vigilancia estratégica para el uso de métodos de planificación familiar en adolescentes que asisten al Hospital Materno Infantil (No publicada) - 2015
- Consultora para Evaluación de la incorporación de la perspectiva de género en 8 organizaciones contraparte de DIAKONIA- 2015.



Unión Europea

Cooperación Española
HONDURAS

Este proyecto es financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

www.flacso.edu.hn **https://omih.unah.edu.hn**